

REPÚBLICA DE COLOMBIA



RAMA JUDICIAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN -

SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, veintiséis (26) de abril de dos mil veintiuno (2021)

Apelación auto
Exp. 014-2017-00647

Vencido el traslado de que trata el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, se resuelve el recurso de apelación interpuesto por RIGOBERTO SEPULVEDA CANO, en el proceso ejecutivo a continuación que en su contra adelanta MARÍA WITER GIRALDO ARANGO (Rad. 05001-31-05-014-2017-00647-01).

ANTECEDENTES:

Frente a la orden de apremio del 20 de octubre de 2017 (fl 7 del cuaderno del proceso ejecutivo), el ejecutado propuso las excepciones de nulidad por indebida representación y pago parcial. La primera la fundamentó en que en el proceso ordinario que culminó con la sentencia base de la ejecución, su apoderado renunció al poder, y el despacho no lo requirió para constituir uno nuevo, por lo que durante ese juicio quedó *desprotegido*, cuando lo que debió hacerse consistía en designarle un curador *en aplicación del debido proceso para garantizar una defensa idónea en igualdad de condiciones* que le permitiera la contradicción probatoria, circunstancia que no tuvo lugar, y por ello la sentencia contiene un vicio que impide su cobro.

El juzgador de conocimiento halló que dicho medio de defensa no logró probarse, para ello revisó las diligencias del proceso ordinario señalando que

los presupuestos fácticos que rodearon el caso, configuraron la denominada contumacia, más no la indebida representación alegada.

Rigoberto Sepúlveda Cano, aspira a que se revoque tal determinación y en su lugar se dé prosperidad a la antedicha excepción, señalando que la contumacia no fue lo acaecido en el sub lite, porque para su concreción era necesaria la existencia de apoderado judicial de la parte, y que, pese a ello, ninguno hubiere concurrido a la audiencia sin justificación. Insiste en que en el proceso ordinario se vulneró su derecho de defensa al haberse adelantado su trámite sin requerirle para constituir un nuevo apoderado.

En el término pertinente, las partes presentaron sus alegaciones de segunda instancia, con argumentos semejantes a los expuestos en las etapas procesales transcurridas en primer grado.

CONSIDERACIONES:

Según el numeral 2° del artículo 442 del CGP, norma aplicable a este rito por lo previsto en el artículo 145 del CPT y de la SS, una de las excepciones que puede proponerse cuando la base de la ejecución es una sentencia, es la llamada *nulidad por indebida representación*. La doctrina y la jurisprudencia se han encargado de definir esta causal, señalando que se está en presencia de ella, en tres eventos: i) cuando un incapaz actúa dentro del proceso como si fuera plenamente capaz, sin concurrir a través de su representante legal; o cuando una persona jurídica es representada en el trámite, porque quien no tiene esa calidad según la ley o los estatutos; ii) cuando quien actúa como apoderado de la parte, carece totalmente de poder, y sus actuaciones no pueden convalidarse a través de la agencia oficiosa prevista en la regla 57 del estatuto adjetivo general; y iii) cuando se interviene en el proceso en calidad de heredero, cónyuge o albacea, y no se allega la prueba de esa condición. (Al respecto ver la sentencia de la Corte Suprema de Justicia del 12 de mayo de 1977, condensada en la página 773 de la obra *Jurisprudencia Civil* del doctrinante Germán Giraldo Zuluaga; y la obra *Tomo I Parte General Código General del Proceso* del autor Hernán Fabio López Blanco, páginas 931, 953 y 954).

Con base en esa precisión, se descende al caso concreto encontrando que ninguna de las tres posibilidades enlistadas se presenta. El demandado es plenamente capaz, o al menos no existe prueba de lo contrario; no se está alegando que un abogado actuó en su nombre sin poder para ello, y no se cuestiona la prueba sobre la calidad de cónyuge, heredero o albacea. Lo que ocurrió en el proceso ordinario laboral, como se aprecia en los folios 21, 25, 26, 43, 55, 56, 58, 59 a 62 de ese cuaderno, consistió en que el demandado otorgó poder y en consecuencia su apoderado contestó la demanda y solicitó pruebas. Antes de la audiencia inicial aquél renunció al poder, comunicando esa decisión a su poderdante a través del servicio postal, el 14 de junio de 2016. En providencia del 1° de septiembre de ese año, la primera instancia aceptó tal renuncia al verificar el aviso aludido en el artículo 76 del CGP, en esa oportunidad, igualmente fijó fecha para la audiencia que tuvo lugar el 24 de febrero de 2017, habiendo transcurrido más de 7 meses entre la comunicación enviada por el entonces apoderado a Sepulveda Cano, y el día de la vista pública, tiempo suficiente para que el hoy ejecutado constituyera un nuevo apoderado, pero así no lo hizo, dado que pese a conocer tal circunstancia, no volvió a comparecer al trámite, supuesto que sin dubitación alguna encuadra en la contumacia de que trata el artículo 30 del Código Adjetivo Laboral, toda vez que según esa norma, si una vez notificado el escrito inicial al demandado, este no se hace presente, el proceso debe continuar sin nueva citación y por lo tanto, sin su presencia.

No es cierto que exista obligación del juzgado de requerir al demandado para constituir un nuevo apoderado: lo previsto en las normas procesales es que cuando un apoderado renuncia al poder, debe intimar a su poderdante con esa noticia, precisamente con la finalidad de que otorgue poder a un nuevo abogado, lo que tuvo lugar en el caso, pese a lo cual, el ejecutado no lo confirió a persona idónea alguna, es decir, que bajo su propio arbitrio decidió no comparecer al trámite, actitud enteramente contumaz.

Desde esa perspectiva, la sentencia base de la orden de pago, no se encuentra viciada por la nulidad planteada, y por consiguiente debe confirmarse el auto que declaró no probada la excepción que al respecto se interpuso.

Finalmente, siguiendo el artículo 365 del CGP, por haberse resuelto desfavorablemente el recurso vertical, costas en esta instancia a cargo del ejecutado, se fijan como agencias en derecho un SMLMV.

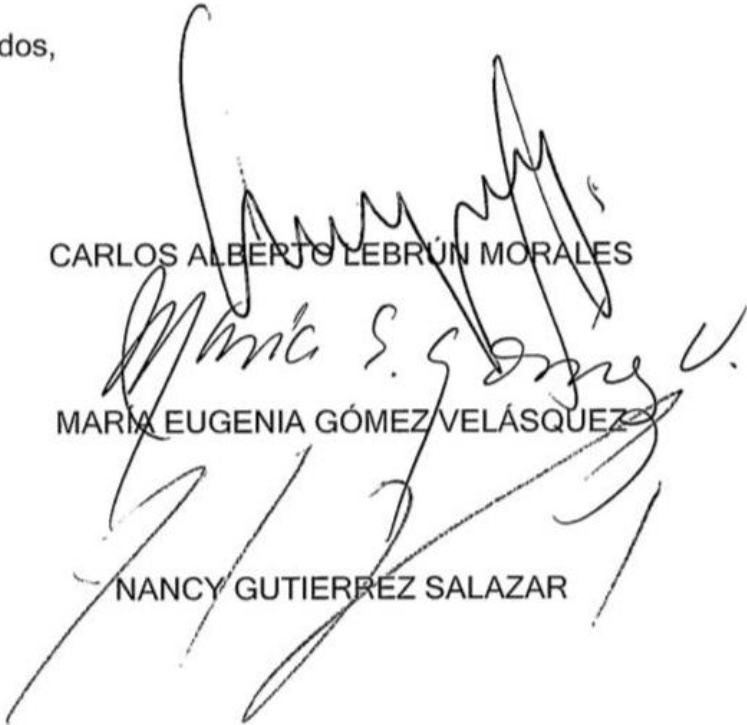
DECISIÓN:

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Cuarta de Decisión Laboral, CONFIRMA el auto apelado de fecha y procedencia conocidas, conforme a lo dispuesto en la parte motiva de esta providencia.

Costas en esta instancia a cargo de Rigoberto Sepulveda Cano. Se fijan las agencias en derecho en un SMLMV.

La presente decisión queda notificada en los **ESTADOS ELECTRÓNICOS** de que trata el artículo 9 del Decreto 806 de 2020.

Los Magistrados,



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES

MARIA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

NANCY GUTIERREZ SALAZAR

Certifico: Que la sentencia anterior fue notificada por ESTADOS N° 70 fijados el 27 de abril de 2021 en la página web de la rama judicial a las 8 a.m.

El Secretario.